

SEMPITERNA IMPREVISIÓN



Cuando el 17 de octubre del 2004 el diario norteamericano Pittsburg Post Gazette dio como titular, "Nueva Orleáns en peligro de inundación. El huracán Iván pasó de largo, pero un impacto directo de otro vendaval inundará sus diques y dejará miles de muertos", nadie le prestó atención. Y como los políticos siempre encuentran a quien echar la culpa, llegó el huracán Katrina y dejó las patéticas imágenes que todos hemos visto. El dinero para los muros de contención de los canales de Nueva Orleáns se lo llevó la guerra de Irak.

El mundo del dinero sigue haciendo oídos sordos a las quejas de los científicos y ecologistas, y siguen sacando conejos de las chisteras con la ayuda de los oportunistas de turno. Que esta catástrofe haya sucedido en un país que sistemáticamente se ha negado a firmar el protocolo de Kyoto para prevenir el efecto invernadero, por una vez, es un acto de justicia; de tocarle a alguien, que se cebe sobre quienes desprecian las opiniones externas y pasean sus ejércitos por el mundo como toda razón: lo lamentable es que, como siempre, lo están pagando los más pobres.

Un huracán se carga del agua que absorbe, y es más intenso en función de que dicho líquido esté más o menos caliente. Durante estos últimos años se han sucedido huracanes de enorme violencia, pero si estudiamos sus intensidades comprobaremos que cada vez han sido más violentos, coincidiendo con la subida de temperatura de la tierra.

En nuestra zona está sucediendo lo mismo: algunos llevamos años clamando por los abusos cometidos en la costa, a la que se ha empapelado de ladrillos y hormigón. El agua del Guadiaro, de los pozos, o de las reservas existentes en la capa freática del subsuelo, ya no dan para todos. Como tampoco dan las infraestructuras, los servicios o la protección ciudadana. Que organismos tan poco ilustrados como los ayuntamientos tengan tanto poder de destrucción, es verdaderamente esperpéntico. Pero así es, y lo hacen con la aquiescencia de la Junta, que tiene la obligación constitucional de vigilar los desatinos urbanísticos, y que en lugar de ello se dedica a aumentarlos.

Cuando se diseña una urbanización se debe hacer sobre unas bases de servicios y un número determinado de habitantes. Sin embargo, hemos crecido irracionalmente, convirtiendo parcelas diseñadas para una casa en dos, terrenos de servicios y esparcimiento en adosados, y las zonas colindantes en campos de golf. Ahora, cuando llega la sequía, el agua no da para todos; hay que regar siete campos de golf, diez canchas de polo, cientos de piscinas y miles de jardines, además de entregar parte de nuestra agua a los municipios colindantes. Y con lo que queda, hacer uso de ella los ciudadanos. Nuestro particular calentamiento ya ha comenzado.

Las quejas vertidas este verano son consecuencia de ello. Como lo es la tardanza en el correo, la masificación, la

suciedad del agua de la mar, la falta de depuradoras de aguas residuales, los ruidos, o la limpieza de las zonas comunes, parterres, jardines públicos, etc. Por no hablar de una Comunidad de Propietarios desbordada y dividida entre los que queremos preservar nuestro lugar de residencia, y los que pretenden destruirlo con ladrillos, o con la presunta anexión de Guadalquivir.

No prever el futuro mediato de las cosas es el mejor camino para seguir acumulando problemas. Y los políticos son especialistas en ello dada su precariedad laboral. El calentamiento de la tierra y nuestro desmadre urbanístico tienen el mismo origen: la sempiterna imprevisión y la avaricia vestida de puestos de trabajo.